



# *Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública*

## **RESOLUCIÓN N° 002280-2023-JUS/TTAIP-SEGUNDA SALA**

Expediente : 01669-2023-JUS/TTAIP  
Recurrente : **IVO LUIS DA SILVA QUEREVALÚ**  
Entidad : **MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TUMBES**  
Sumilla : Declara fundado recurso de apelación

Miraflores, 3 de julio de 2023

**VISTO** el Expediente de Apelación N° 01669-2023-JUS/TTAIP de fecha 24 de mayo de 2023, interpuesto por **IVO LUIS DA SILVA QUEREVALÚ** contra la denegatoria por silencio administrativo negativo de la solicitud de acceso a la información pública presentada ante la **MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TUMBES** mediante Registro N° 10337 de fecha 4 de mayo de 2023.

### **CONSIDERANDO:**

#### **I. ANTECEDENTES**

Con fecha 4 de mayo de 2023, en ejercicio de su derecho de acceso a la información pública, el recurrente solicitó copias fedateadas de la información que a continuación se detalla:

“(…)

**EXPEDIENTE COMPLETO DE FUNCIONAMIENTO Y CERTIFICADO DE DEFENSA CIVIL COMO REQUISITOS PREVIOS PARA LA AUTORIZACION de ESTACIÓN DE RUTA TIPO II de conformidad al DS 017-2009 MTC y modificatorias (RESOLUCIÓN GERENCIAL PARA LA AUTORIZACIÓN DE CONCESIÓN DE LINEA PARA PRESTAR SERVICIO DE TRANSPORTES PÚBLICO INTERURBANO) de la EMPRESA DE TRANSPORTES “SERVICIOS TURÍSTICOS MI TUMBES SAC”, que viene realizando sus operaciones de embarque y desembarque de pasajeros en la TERCERA CUADRA CALLE ALFONSO UGARTE EN LA RUTA TUMBES SAN JUAN DE LA VIRGEN – CRUZ BLANCA Y VICEVERSA.**

*EXPEDIENTE DE AUTORIZACION de ESTACIÓN DE RUTA de conformidad al DS, 017-2009 MTC y modificatorias (RESOLUCIÓN GERENCIAL PARA LA AUTORIZACIÓN DE CONCESIÓN DE LINEA PARA PRESTAR SERVICIO DE TRANSPORTES PÚBLICO INTERURBANO) de la EMPRESA DE TRANSPORTES MAXIMILIANO EIRL y EMPRESA DE TRANSPORTES TOURS EIRL, ambas viene realizando sus operaciones de embarque y desembarque de pasajeros en la CUARTA CUADRA CALLE ALFONSO UGARTE EN LA RUTA TUMBES - SAN JUAN DE LA VIRGEN – CRUZ BLANCA Y VICEVERSA.*

EXPEDIENTE DE AUTORIZACION de ESTACIÓN DE RUTA de conformidad al DS. 017-2009 MTC y modificatorias (RESOLUCIÓN GERENCIAL PARA LA AUTORIZACIÓN DE CONCESIÓN DE LINEA PARA PRESTAR SERVICIO DE TRANSPORTES PÚBLICO INTERURBANO) de la EMPRESA DE TRANSPORTES ATEOCHE EIRL. Viene realizando sus operaciones de embarque y desembarque de pasajeros en la CUARTA CUADRA CALLE ALFONSO UGARTE EN LA RUTA TUMBES - SAN JACINTO – CASA BLANQUEADA Y VICEVERSA.

**EXPEDIENTE DE AUTORIZACION de ESTACIÓN DE RUTA de conformidad al DS. 017-2009 MTC y modificatorias (RESOLUCIÓN GERENCIAL PARA LA AUTORIZACIÓN DE CONCESIÓN DE LINEA PARA PRESTAR SERVICIO DE TRANSPORTES PÚBLICO INTERURBANO) de la EMPRESA DE TRANSPORTES 23 AMIGOS y EMPRESAS DE TRANSPORTES BULAPED EIRL** Viene realizando sus operaciones de embarque De pasajeros en la PRIMERA CUADRA AV. MARISCAL CASTILLA RUTA TUMBES SAN JACINTO LA PEÑA Y VICEVERSA.

EXPEDIENTE COMPLETO DE FUNCIONAMIENTO Y CERTIFICADO DE DEFENSA CIVIL COMO REQUISITOS PREVIOS PARA LA AUTORIZACION de ESTACIÓN DE RUTA TIPO II de conformidad al DS 017-2009 MTC y modificatorias (RESOLUCIÓN GERENCIAL PARA LA AUTORIZACIÓN DE CONCESIÓN DE LINEA PARA PRESTAR SERVICIO DE TRANSPORTES PÚBLICO INTERURBANO) de la EMPRESA DE TRANSPORTES “PAMCAB SAC”, que viene realizando sus operaciones de embarque y desembarque de pasajeros en la SEGUNDA CUADRA CALLE JAEN EN LA RUTA TUMBES SAN JUAN DE LA VIRGEN – CRUZ BLANCA, PAMPAS, CABUYAL Y VICEVERSA.

EXPEDIENTE COMPLETO DE FUNCIONAMIENTO Y CERTIFICADO DE DEFENSA CIVIL COMO REQUISITOS PREVIOS PARA LA AUTORIZACION de ESTACIÓN DE RUTA TIPO II de conformidad al DS 017-2009 MTC y modificatorias (RESOLUCIÓN GERENCIAL PARA LA AUTORIZACIÓN DE CONCESIÓN DE LINEA PARA PRESTAR SERVICIO DE TRANSPORTES PÚBLICO INTERURBANO) de la EMPRESA DE TRANSPORTES “TUMCAB SAC”, que viene realizando sus operaciones de embarque y desembarque de pasajeros en la SEGUNDA CUADRA CALLE JAEN EN LA RUTA TUMBES SAN JUAN DE LA VIRGEN – CRUZ BLANCA, PAMPAS, CABUYAL Y VICEVERSA.

EXPEDIENTE COMPLETO DE FUNCIONAMIENTO Y CERTIFICADO DE DEFENSA CIVIL COMO REQUISITOS PREVIOS PARA LA AUTORIZACION de ESTACIÓN DE RUTA TIPO II de conformidad al DS 017-2009 MTC y modificatorias (RESOLUCIÓN GERENCIAL PARA LA AUTORIZACIÓN DE CONCESIÓN DE LINEA PARA PRESTAR SERVICIO DE TRANSPORTES PÚBLICO INTERURBANO) de la EMPRESA DE TRANSPORTES “CALINGA”, que viene realizando sus operaciones de embarque y desembarque de pasajeros en la SEGUNDA CUADRA CALLE JAEN EN LA RUTA TUMBES SAN JUAN DE LA VIRGEN – CRUZ BLANCA, PAMPAS, CABUYAL Y VICEVERSA.

EXPEDIENTE COMPLETO DE FUNCIONAMIENTO Y CERTIFICADO DE DEFENSA CIVIL COMO REQUISITOS PREVIOS PARA LA AUTORIZACION de ESTACIÓN DE RUTA TIPO II de conformidad al DS 017-2009 MTC y modificatorias (RESOLUCIÓN GERENCIAL PARA LA AUTORIZACIÓN DE CONCESIÓN DE LINEA PARA PRESTAR SERVICIO DE TRANSPORTES PÚBLICO INTERURBANO) de la EMPRESA DE TRANSPORTES “PREFO”, que viene realizando sus operaciones de embarque y desembarque de pasajeros en la SEGUNDA CUADRA CALLE JAEN EN LA RUTA TUMBES SAN JUAN DE LA VIRGEN – CRUZ BLANCA, PAMPAS, CABUYAL Y VICEVERSA.”

Con fecha 24 de mayo de 2023 el administrado interpuso el recurso de apelación materia de análisis, al considerar denegada su solicitud de acceso a la información pública en aplicación del silencio administrativo negativo.

Mediante la Resolución N° 001984-2023-JUS/TTAIP-SEGUNDA SALA<sup>1</sup> se admitió a trámite el referido recurso impugnatorio, requiriendo la remisión del expediente administrativo generado para la atención de la solicitud de acceso a la información pública, así como la formulación de sus descargos, siendo que hasta la fecha no se recibió documentación alguna.

## II. ANÁLISIS

El numeral 5 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú establece que toda persona tiene derecho a solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a recibirla de cualquier entidad pública, en el plazo legal, con el costo que suponga el pedido, exceptuando las informaciones que afectan la intimidad personal y las que expresamente se excluyan por ley o por razones de seguridad nacional.

A su vez, el artículo 3 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado por el Decreto Supremo N° 021-2019-JUS<sup>2</sup>, establece que toda información que posea el Estado se presume pública, salvo las excepciones de ley, teniendo la obligación de entregar la información que demanden las personas en aplicación del principio de publicidad.

Por su parte, el artículo 10 de la Ley de Transparencia señala que las entidades de la Administración Pública tienen la obligación de proveer la información requerida si se refiere a la contenida, entre otros, en documentos escritos, siempre que haya sido creada u obtenida por ella o que se encuentre en su posesión o bajo su control.

Cabe anotar que el segundo párrafo del artículo 13 de la Ley de Transparencia establece que la denegatoria al acceso a la información solicitada debe ser debidamente fundamentada por las excepciones de los artículos 15 a 17 de la mencionada ley.

Añade, el primer párrafo del artículo 18 del mismo cuerpo normativo que los casos establecidos en los artículos 15, 16 y 17 del referido texto son los únicos en los que se puede limitar el derecho al acceso a la información pública, por lo que deben ser interpretados de manera restrictiva por tratarse de una limitación a un derecho fundamental.

### 2.1 Materia en discusión

De autos se advierte que la controversia radica en determinar si la información solicitada es pública, y en consecuencia, corresponde su entrega al recurrente.

### 2.2 Evaluación de la materia en discusión

Sobre el particular, toda documentación que obra en el archivo o dominio estatal es de carácter público para conocimiento de la ciudadanía por ser de interés general, conforme lo ha subrayado el Tribunal Constitucional en el Fundamento 5 de la sentencia recaída en el Expediente N° 4865-2013-PHD/TC indicando:

---

<sup>1</sup> Resolución notificada a la entidad con fecha 22 de junio de 2023, conforme la información proporcionada por la Secretaría Técnica de esta instancia.

<sup>2</sup> En adelante, Ley de Transparencia.

*“La protección del derecho fundamental de acceso a la información pública no solo es de interés para el titular del derecho, sino también para el propio Estado y para la colectividad en general. Por ello, los pedidos de información pública no deben entenderse vinculados únicamente al interés de cada persona requirente, sino valorados además como manifestación del principio de transparencia en la actividad pública. Este principio de transparencia es, de modo enunciativo, garantía de no arbitrariedad, de actuación lícita y eficiente por parte del Estado, y sirve como mecanismo idóneo de control en manos de los ciudadanos.”*

Al respecto, el artículo 3 de la Ley de Transparencia, que consagra expresamente el Principio de Publicidad, establece que *“Toda información que posea el Estado se presume pública, salvo las excepciones expresamente previstas por (...) la presente Ley”*. Es decir, establece como regla general la publicidad de la información en poder de las entidades públicas, mientras que el secreto es la excepción.

En esa línea, el Tribunal Constitucional en el Fundamento 8 de la sentencia recaída en el Expediente N° 02814-2008-PHD/TC, ha señalado respecto del mencionado Principio de Publicidad lo siguiente:

*“(...) Esta responsabilidad de los funcionarios viene aparejada entonces con el principio de publicidad, en virtud del cual toda la información producida por el Estado es, prima facie, pública. Tal principio a su vez implica o exige necesariamente la posibilidad de acceder efectivamente a la documentación del Estado”*.

Dentro de ese contexto, el tercer párrafo del artículo 13 de la Ley de Transparencia establece que la solicitud de información no implica la obligación de las entidades de la Administración Pública de crear o producir información con la que no cuenten o no tengan obligación de contar al momento de efectuarse el pedido, en tal sentido, efectuando una interpretación *contrario sensu*, es perfectamente válido inferir que la Administración Pública tiene el deber de entregar la información con la que cuenta o aquella que se encuentra obligada a contar.

Asimismo, con relación a los gobiernos locales, es pertinente señalar lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, al señalar que: *“La administración municipal adopta una estructura gerencial sustentándose en principios de programación, dirección, ejecución, supervisión, control concurrente y posterior. Se rige por los principios de legalidad, economía, transparencia, simplicidad, eficacia, eficiencia, participación y seguridad ciudadana, y por los contenidos en la Ley N° 27444 (...).”* (subrayado nuestro), estableciendo de ese modo que uno de los principios rectores de la gestión municipal es el principio de transparencia.

Igualmente, el artículo 118 *in fine* de la referida ley establece que: *“El vecino tiene derecho a ser informado respecto a la gestión municipal y a solicitar la información que considere necesaria, sin expresión de causa; dicha información debe ser proporcionada, bajo responsabilidad, de conformidad con la ley en la materia.”* (subrayado nuestro).

Siendo ello así, la transparencia y la publicidad son principios que rigen la gestión de los gobiernos locales, de modo que la información que estas entidades posean, administren o hayan generado como consecuencia del ejercicio de sus facultades, atribuciones o el cumplimiento de sus obligaciones, sin importar su origen,

utilización o el medio en el que se contenga o almacene, constituye información de naturaleza pública.

Ahora bien, en el presente caso el recurrente solicitó a la entidad ocho (8) ítems de información, conforme a lo detallado en los antecedentes de la presente resolución. Al respecto, la entidad no dio respuesta a la solicitud de acceso a la información pública del administrado dentro del plazo legal, por lo que este interpuso el recurso de apelación en aplicación del silencio administrativo negativo.

De lo expuesto se deriva que la entidad, al no brindar respuesta alguna, no alegó la inexistencia de la información requerida, o argumentó que no tenía la obligación de poseerla, así como tampoco invocó ninguna causal de excepción, ni ha acreditado que dicha documentación se encuentre protegida por alguna excepción al derecho de acceso a la información pública prevista por la Ley de Transparencia, conforme lo exige el Tribunal Constitucional en el Fundamento 13 de la sentencia recaída en el Expediente N° 02579-2003-HD/TC, la cual precisa:

*“Como antes se ha mencionado, esta presunción de inconstitucionalidad se traduce en exigir del Estado y sus órganos la obligación de probar que existe un bien, principio o valor constitucionalmente relevante que justifique que se mantenga en reserva, secreto o confidencialidad la información pública solicitada y, a su vez, que sólo si se mantiene tal reserva se puede servir efectivamente al interés constitucional que la justifica. De manera que si el Estado no justifica la existencia del apremiante interés público para negar el acceso a la información, la presunción que recae sobre la norma o acto debe efectivizarse y confirmarse su inconstitucionalidad; y, consecuentemente, la carga de la prueba sobre la necesidad de mantener en reserva el acceso a la información ha de estar, exclusivamente, en manos del Estado”.* (subrayado agregado)

Sin perjuicio de lo expuesto, este Colegiado considera necesario precisar que en el supuesto que la documentación solicitada contenga información protegida por las excepciones reguladas en la Ley de Transparencia, tal como datos de individualización y contacto de personas naturales, ello no es óbice para denegar la solicitud de acceso a la información pública; considerando que el artículo 19 de la Ley de Transparencia establece que cuando un documento contenga, en forma parcial, información que no sea de acceso público, se permitirá el acceso a la información disponible del documento.

En consecuencia, corresponde estimar el recurso de apelación presentado por el recurrente y ordenar a la entidad que proporcione la documentación pública requerida, tachando de ser el caso los datos de individualización y contacto de personas naturales; o, en caso de inexistencia de la misma, informe de manera clara y precisa respecto de dicha circunstancia al recurrente, conforme lo dispuesto en el precedente de observancia obligatoria emitido por esta instancia mediante Resolución N° 010300772020<sup>3</sup>.

---

<sup>3</sup> Dentro de ese marco, en el supuesto de inexistencia de la información requerida, es importante resaltar que mediante la Resolución N° 010300772020 emitida por esta instancia y publicada en el Diario Oficial El Peruano el día 11 de febrero de 2020, se declaró precedente administrativo de observancia obligatoria lo siguiente:

*“Las entidades no podrán denegar el acceso a la información pública, argumentando únicamente que la documentación requerida no ha sido creada por ésta, atendiendo a que el derecho de acceso a la información pública abarca no solamente la posibilidad de obtener aquella que ha sido generada por la propia institución, sino también a la que no siendo creada por ésta, se encuentra en su posesión. En tal sentido, cuando las entidades denieguen el acceso a la información pública en virtud a la inexistencia de la documentación requerida, deberán previamente verificar mediante los requerimientos a las unidades orgánicas que resulten pertinentes si la información: i) fue generada por la entidad; y, ii) si ha sido obtenida, se encuentra en su posesión o bajo su control; asimismo, **luego de descartar ambos**”*

Finalmente, de conformidad con los artículos 30 y 35 del Reglamento de la Ley de Transparencia, aprobado por el Decreto Supremo N° 072-2003-PCM, en aplicación de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, corresponde a cada entidad determinar la responsabilidad en que eventualmente hubieran incurrido sus funcionarios y/o servidores por la comisión de presuntas conductas infractoras a las normas de transparencia y acceso a la información pública.

Asimismo, el artículo 4 de la Ley de Transparencia señala que todas las entidades de la Administración Pública quedan obligadas a cumplir lo estipulado en la presente norma y que los funcionarios o servidores públicos que incumplieran con las disposiciones a que se refiere esta Ley serán sancionados por la comisión de una falta grave, pudiendo ser incluso denunciados penalmente por la comisión de delito de Abuso de Autoridad a que hace referencia el artículo 376 del Código Penal.

Además, el artículo 368 del Código Penal establece que el que desobedece o resiste la orden legalmente impartida por un funcionario público en el ejercicio de sus atribuciones, salvo que se trate de la propia detención, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis años.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 6 y el numeral 1 del artículo 7 del Decreto Legislativo N° Decreto Legislativo que crea la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Fortalece el Régimen de Protección de Datos Personales y la Regulación de la Gestión de Intereses.

#### **SE RESUELVE:**

**Artículo 1.- DECLARAR FUNDADO** el recurso de apelación recaído en el Expediente N° 01669-2023-JUS/TTAIP, interpuesto por **IVO LUIS DA SILVA QUEREVALÚ**; en consecuencia, **ORDENAR** a la **MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TUMBES** que entregue la información pública requerida, conforme a los argumentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución, bajo apercibimiento de que la Secretaría Técnica de esta instancia, conforme a sus competencias, remita copia de los actuados al Ministerio Público en caso se reporte su incumplimiento, en atención a lo dispuesto por los artículos 368 y 376 del Código Penal.

**Artículo 2.- SOLICITAR** a la **MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TUMBES** que, en un plazo máximo de siete (7) días hábiles, acredite la entrega de dicha información a **IVO LUIS DA SILVA QUEREVALÚ**.

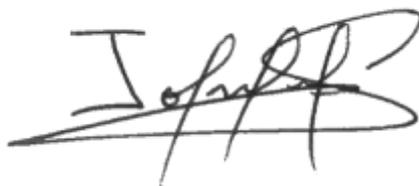
**Artículo 3.- DECLARAR** agotada la vía administrativa al amparo de lo dispuesto en el artículo 228 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS.

**Artículo 4.- ENCARGAR** a la Secretaría Técnica del Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la notificación de la presente resolución a **IVO LUIS DA SILVA QUEREVALÚ** y a la **MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TUMBES**, de conformidad con lo previsto en el numeral 18.1 del artículo 18 de la norma antes citada.

---

supuestos, deberán comunicar de manera clara y precisa dicha circunstancia al solicitante. (subrayado y resaltado agregado)

**Artículo 5.- DISPONER** la publicación de la presente resolución en el Portal Institucional ([www.minjus.gob.pe](http://www.minjus.gob.pe)).



JOHAN LEÓN FLORIÁN  
Vocal Presidente



VANESSA LUYO CRUZADO  
Vocal



VANESA VERA MUELLE  
Vocal

vp: vlc